



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

PDP En la ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de mayo del año dos mil veintiséis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los recursos interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos “*Arquimia SA c/ EN-AFIP s/ Proceso de conocimiento*”, Causa CAF 13829/2020/CA1, planteado al efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho la sentencia apelada, el Señor Juez de Cámara, Doctor Sergio Gustavo Fernández dice:

I.- Que por sentencia del 23/9/24 –y su aclaratoria del 1/10/24–, la Sra. juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta por Arquimia SA contra el Estado Nacional –ex AFIP-DGI– y, en consecuencia, declaró inaplicable, al caso, la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley 20.628 (t.v.), al igual que los artículos 83 y 84, con respecto al impuesto a las ganancias –en lo sucesivo, “IG”–, período fiscal 2019. Las costas las impuso en el orden causado.

Reseñó que la cuestión litigiosa concernió a la aplicación del ajuste por inflación y la actualización de las amortizaciones, a cuyo tenor la parte actora encausó su pretensión a través de una acción en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo sucesivo: “CPCCN”.

Luego de referir a las expresiones esgrimidas por las partes en sus respectivas presentaciones, y de mencionar que en la causa se produjo prueba, repasó los antecedentes normativos y jurisprudenciales referidos al mecanismo de ajuste por inflación, con especial atención a los precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “*Dugan Trocello*” y “*Candy*”.

Expuso que, según surge de dichos precedentes, en la medida en que resulte afectado el derecho de propiedad del contribuyente, por verificarse un supuesto de confiscatoriedad, debe considerarse inaplicable la normativa que prohíbe la utilización del mecanismo de ajuste por inflación, al igual que la actualización de las amortizaciones.

En cuanto a la prueba pericial contable producida en la causa, sostuvo que se trata de una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, a cargo de personas distintas a las partes contendientes, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos y/o científicos, a través de la cual se



suministra al juez de argumentos o razones para la formación de su convencimiento, respecto de ciertos hechos.

Transcribió los valores informados por el perito contador designado, y ponderó la alícuota efectiva del impuesto era del 48,12%.

Destacó que la representación fiscal no presentó ningún informe, novedad o resultado que condujera a apartarse de las conclusiones arribadas por el perito contador designado en la causa.

Mencionó que, de acuerdo con este último informe, la determinación del impuesto, con prescindencia del régimen de ajuste contemplado en el Título VI de la ley del gravamen, y de la actualización de las amortizaciones, arrojó un resultado que excedería el límite razonable de imposición.

En el *Considerando VI* de su sentencia, la magistrada se refirió a la situación macroeconómica del país, con sustento en un informe del Banco Central de la República Argentina, titulado “Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación correspondiente al año 2019”.

En punto a las costas, consideró que correspondía apartarse del principio previsto en el primer párrafo del artículo 68 del CPCCN, y distribuir las por su orden, en mérito a las particularidades del caso y al criterio adoptado por el Alto Tribunal en la causa “*Candy*”.

II. Que, contra dicha sentencia se alzaron ambas partes, la actora interpuso su recurso de apelación el 25/9/25 [12:34 hs.] y el fisco nacional el 30/9/25 [12:48 hs.]; ambos remedios fueron concedidos libremente el 1/10/25. La expresión de agravios de la accionante fue presentada el 21/10/25 [13:47 hs.] y la del fisco nacional el 29/10/25 [10:46 hs.]. La actora contestó el 18/11/25 [15:49 hs.], el fisco nacional no lo hizo (v. resolución del 19/11/25).

El 27/12/24 [8:40 hs.] el Sr. Fiscal General acompañó su dictamen.

Cabe agregar que la sentencia de grado reguló los honorarios del perito contador Adrián Daniel Zugman, medida que no fue objeto de apelación por ninguna de las partes, ni por el propio beneficiario.

III. Que, en su memorial, la representación fiscal comienza cuestionando la vía procesal escogida por la contraria para formular su planteo y su convalidación por la *a quo*.

Sostiene que la acción declarativa no procede en los casos en los cuales el contribuyente presenta la declaración jurada –“DDJJ”– del impuesto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

aplicando el ajuste por inflación, al tiempo que el fisco nacional no la impugne, ni determine ninguna diferencia. Apunta que la acción fue prematura y conjetural.

Explica que la accionante presentó la DDJJ aplicando íntegramente el ajuste por inflación en contravención con la normativa vigente; al ser ello así, no existiría incertidumbre.

Agrega que, en caso de que se determinara de oficio la materia imponible, la contribuyente podría ocurrir por las vías recursivas previstas en la ley 11.683.

Expone que, en uso de sus facultades de verificación y fiscalización, el 11/3/21 dio inicio a una verificación respecto al IG-2019, de la cual surgió una diferencia a favor del organismo de \$ 22.820.564,74; ello motivó el dictado de la resolución 67/24 (DV SRR1), que cual impugnada por Arquimia SA.

Niega que exista incertidumbre con relación a la obligación a pagar.

En cuanto al fondo del asunto, argumenta que la sentencia apelada adolece de arbitrariedad, dado que aplicó erróneamente la normativa vigente para el período fiscal 2019.

Luego de referir al plexo normativo en cuestión, señala que la sentenciante de grado ha omitido referir al contenido de la ley 27.430, en la cual se establecieron las condiciones para la aplicación del ajuste por inflación, a partir de los ejercicios iniciados el 1/1/18.

Pone de resalto que, en el particular, el ejercicio comercial 2019 de Arquimia SA tuvo inicio el 1/11/18 y cierre el 31/10/19.

Explica que, al haberse reinstaurado el mecanismo de ajuste por inflación impositivo para ejercicios iniciados a partir del 1/1/18, debe verificarse que el índice de precios al consumidor, calculada desde el inicio y hasta el cierre del ejercicio, supere el 55%.

Una vez corroborado tal extremo –prosigue–, el contribuyente se encuentra habilitado para aplicar el mecanismo de ajuste en su DDJJ, aunque sólo en 1/3. En cuanto a los períodos iniciados a partir del 1/1/19, lo pueden hacer en 1/6.

En el caso particular de autos –ilustra–, el período fiscal 2019 inició el 1/11/18, con lo cual fue posterior al 1/1/18; de allí que Arquimia SA podría aplicar el ajuste por inflación, en la medida en que la variación de Índice de



precios al consumidor –“IPC”–, calculado desde el inicio y hasta el cierre del ejercicio, supere el 55%. Menciona que dicha variación, según datos del IPC publicado en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo –“INDEC”–, fue del 50,50%.

En orden a estas explicaciones, concluye que la actora no se encontraba autorizada a aplicar el mecanismo de ajuste por inflación.

Destaca que la prueba producida en autos ha sido valorada arbitrariamente, ya que nada se dijo acerca de las impugnaciones efectuadas por su parte a la pericial contable.

Desconoce que en el *sub judice* se haya logrado probar la confiscatoriedad alegada, resultando inaplicables al caso los precedentes “*Dugan Trocello*” y “*Candy*”.

Señala que la perito contadora dictaminó que la alícuota efectiva del IG-2019, sin aplicar el ajuste por inflación, alcanzó el 48,12%; sin embargo, no explicó de qué manera arribó a dicho resultado. Además, si se toma el IG histórico determinado –\$ 151.437.668,61– sobre la utilidad impositiva ajustada por inflación –\$ 428.723.679,56–, la alícuota efectiva sería del 35,32%. Aclara que ambos guarismos empleados para el cálculo surgen de la propia pericia.

Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.

IV. Que, de su lado, la parte actora expresa agravios dirigidos contra lo resuelto en torno a las costas del proceso, lo cual califica de injusto.

Afirma que de tal modo se ha beneficiado a la parte demandada, contraviniendo el principio de igualdad, imparcialidad, congruencia y sana crítica.

Afirma que hubo un apartamiento al principio general de la derrota, sin brindar fundamento suficiente para ello.

Cita jurisprudencia y doctrina, no formula reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, en lo que es materia de agravios, con costas.

V. Que, previo a todo, es importante recordar que no me encuentro obligado a seguir a las partes apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones propuestas a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, [272:225](#), [278:271](#), [291:390](#), [297:140](#); 301:970; esta Sala, en sus anteriores





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

composiciones, “ACIJ c/ EN-ley 24240-Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/amparo ley 16.986”, Causa CAF 5916/2009, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, Causa CAF 29024/2010, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA-Comunicación “A” 5147 y otro s/proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/EN- DNM Disp 1207/11-Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, Causa CAF 18282/2011, del 25/8/11; “[Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo](#)”, Causa CAF 41147/2013, del 7/8/14, “[Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo](#)”, Causa CAF 57052/2013, del 7/5/15, “[Araujo Medina Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM](#)”, Causa CAF 77545/2017, del 27/4/18 y “[D'Alessandro, Jorge Héctor \(TF 33405-I\) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo](#)”, Causa CAF 49932/2015/CA2, del 2/5/24, entre otras).

VI. Que, según se desprende de las constancias de autos, Arquimia SA promovió una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del CPCCN contra el Estado Nacional –ex AFIP-DGI–, pretendiendo obtener una declaración de certeza en cuanto a la aplicabilidad del mecanismo de ajuste por inflación, respecto del IG-2019 (v. escrito de demanda, punto II, presentada el 8/10/20 [1:45 hs.]).

En esta misma presentación, la accionante describió –en lo que incumbe aquí mencionar– los importes correspondientes al “ajuste por inflación”; al impuesto determinado con y sin su aplicación, y la tasa nominal y efectiva resultante de los cálculos liquidatorios del impuesto.

Luego de ello, afirmó que resultaría aplicable al caso la doctrina jurisprudencial sentada en el caso “Candy”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento que el impuesto determinado, sin el ajuste por inflación, arrojó un resultado confiscatorio.

VII. Que, junto con su demanda, la actora acompañó la DDJJ-IG-2019 original; los registros contables correspondientes al ejercicio comercial cerrados el 31/10/19, entre ellos: el estado de situación patrimonial; el estado de



evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo con sus notas; el estado de resultados y sus notas; la Memoria y el Informe especial de auditor independiente, confeccionado por el contador público Héctor J. Palermo, el 6/2/20.

En pos de la información que de dichos documentos se obtiene, de consuno con el proveniente de la prueba pericial contable ofrecida en la causa, se sustenta la pretensión de la actora.

VIII. Que, como primera medida, corresponde que me aboque al análisis del agravio presentado por el organismo recaudador, referido al cauce procesal en el cual viene transitando esta *litis*.

Dicha parte se opuso a su viabilidad, tanto al contestar la demanda (punto IV), como al fundar su apelación ante esta Alzada (punto III). En lo medular, recalca el carácter prematuro y conjetural de la pretensión de la actora, y la ausencia de incertidumbre y perjuicio actual.

Sobre el particular, considero que en autos se han acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia de la acción, en tanto se ARCA ha iniciado un procedimiento de fiscalización contra la actora.

En efecto, en cumplimiento de la medida para mejor proveer dictada por esta Sala el 10/12/24, la demandada informó que se había iniciado una fiscalización a la aquí actora, que derivó en el dictado de la resolución 67/24 (DV SRR1), en curso ante el Tribunal Fiscal de la Nación (presentación del 17/12/24 [12:49 hs.]).

Sobre este asunto, cabe recordar que la Corte Federal ha seguido en forma ya arraigada (desde Fallos: 307:1379; 325:474; 326:4774; 327:2529; 328:502 y 3586; 332:66; 334:236, entre muchos otros) una serie de exigencias tomadas de la Suprema Corte de los Estados Unidos (*in re “Aetna Life Insurance Co. v. Haworth, 300 US. 227”*), en cuanto requirió para la procedencia formal de este tipo de acciones: a) una actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; y c) que aquella actividad tenga concreción bastante.

Con especial referencia a la procedencia formal en la materia tributaria, el Tribunal Címero ha entendido que la afectación concreta se halla probada cuando existe una determinación de oficio por parte del organismo fiscal, o cuando este ha emitido intimaciones de pago, notificaciones de deuda y/o requerimientos (Fallos: [327:1051](#); [328:3599](#); [330:3777](#), entre otros).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

En otras palabras, ha considerado que existe una conexión directa entre los intereses o los derechos que la parte actora puede considerar afectados y la norma o acto al que ella atribuye dicho perjuicio (Fallos: [341:101](#)).

Al respecto, y como he tenido oportunidad de expresar en otra ocasión, resulta conveniente en este punto hacer notar que las acciones declarativas constituyen, pues, cauces destinados a dar certidumbre. Ello así, pues su finalidad consiste en interpretar y esclarecer el contenido de una relación existente, determinando su objeto y las modalidades como debe ser cumplida. Ciertamente es que el recaudo referido a la existencia de una lesión actual, que se erige en la condición sine qua non para la admisibilidad de la acción, es compartida con todas las pretensiones que se plantean ante el Poder Judicial de la Nación, en cuanto requieren la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción. Ahora, es aquí donde realmente cobran virtualidad las acotaciones de Chiovenda, en tanto el interés como presupuesto de la pretensión de sentencia meramente declarativa de certeza consiste en una situación de hecho tal que, el actor, sin la declaración judicial de certeza que pide, sufrirá un daño, de modo que la declaración judicial se presenta como el medio necesario para evitar ese perjuicio. Así también, el art. 322 del Código Procesal requiere un interés específico en utilizar esa vía, traducido en la inexistencia de otro proceso alternativo. Esta subsidiariedad del cauce procesal excluye su admisibilidad si la pretensión pudo haber sido planteada por medio de una sentencia de condena (cfr., Fernández, Sergio G., “*La acción meramente declarativa en el contencioso administrativo*”, en BALBIN, Carlos F. (dir.), *Proceso Contencioso Administrativo Federal*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014, tomo II, ps. 836 y ss.).

Por lo demás, en el mismo modo se ha pronunciado la Sala II del fuero, en la Causa 33047/2017, “[Monsanto Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva](#)”, del 23/2/17.

A la luz de lo expuesto, y en línea con lo argumentado inicialmente por la accionante, considero que **corresponde desestimar los agravios presentados por el fisco nacional, en este particular asunto.**

IX. Que, sentado lo anterior, se impone introducirme en el estudio de la cuestión de fondo involucrada en autos.



Para ello, preliminarmente debo definir su alcance.

Según se desprende del objeto de la demanda que dio inicio a este proceso judicial –del cual di cuenta en el *Considerando VI* de este voto–, la pretensión de Arquimia SA se direccionó únicamente hacia la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto, quedando excluido –por no invocarse–, todo lo concerniente a la actualización de las amortizaciones previstas en los artículos 83, 84 y concordantes de la misma ley.

Ello aclarado, se impone que efectúe dos análisis estructurales, de cara a examinar si la sentencia apelada, respecto de este asunto, amerita su convalidación o no.

Ellos corresponden a los siguientes tópicos: *a)* el cambio normativo operado en los últimos lustros, y *b)* la aptitud y la suficiencia de las argumentaciones y las probanzas arrimadas y producidas en autos, a fin de respaldar la pretensión de la accionante.

X. Que, con relación al primer análisis descripto en el considerando precedente, sabido es que, desde un plano teórico, la trama se generó a partir de la sanción de la ley 24.073 de 1992 –y sus normas concordantes–, cuyo artículo 39 dispuso que las actualizaciones impositivas debían tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta marzo de 1992.

En este orden, en la causa “*Establecimiento El Carmen SRL c/EN-AFIP DGI ley 24.073 s/proceso de conocimiento*”, Causa CAF 48285/2003, del 11/11/10 –entre otros precedentes–, esta Sala, en su anterior composición, reseñó la secuencia histórica del mentado mecanismo de ajuste, tanto desde el plano normativo –fundamentalmente desde su instauración por la ley 23.260, pasando por la aprobación de la denominada “*Ley de Convertibilidad del Austral*” (ley N° 23.928), hasta llegar al dictado de la ley 24.073, que suspendió la aplicación del mecanismo a partir de abril de 1992–; el plano macroeconómico y jurídico: salida del “*régimen de convertibilidad*” –con especial mención de la “*Ley de Emergencia Económica*” (ley N° 25.561), de los decretos 214/02, 1269/02, 554/03, de la resolución de la Secretaría de Hacienda 100/02 y la Nota Externa N° 10/02 de la AFIP–, hasta llegar al plano jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el dictado de los precedentes “*Santiago Dugan Trocello SRL c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo*”, del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

30/6/05 (cfr. CSJN, [Fallos 328:2567](#)) y “Candy SA c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/7/09 (cfr. CSJN, [Fallos: 332:1571](#)).

Allí se señaló que de los precedentes jurisprudenciales referidos, que resultan complementarios, se extrajo en primer lugar, y como principio general, que el plexo normativo que impide a los contribuyentes la actualización de los balances impositivos para el cálculo de tributos, tuvo origen en el “*órgano al que el texto constitucional atribuye el ejercicio del poder tributario –respetándose, incluso, el procedimiento legislativo que estatuye el art. 52 de la norma suprema–*”, por lo cual “*no puede alegarse una violación al principio de reserva de ley tributaria, conclusión que no se modifica por el mero hecho de que haya existido un período en el que se observó un sensible proceso inflacionario*” (v. *Considerando IV*, fallo cit.).

En esa misma senda también se sostuvo que, sin perjuicio de ello, el Máximo Tribunal ha entendido que la eventual confiscatoriedad que puede provocar el cálculo del impuesto a las ganancias sin el ajuste, opera como excepción al principio general expuesto. Confiscatoriedad que ha sido definida, a la luz de la jurisprudencia clásica del Tribunal, como “*absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital*” “*que exceda los límites razonables de imposición*” (*Considerando 14*).

Se afirmó además que, siguiendo a la Corte Suprema, la configuración de esa excepción debe ser debidamente fundada y acreditada por el contribuyente que solicita la aplicación de la actualización en cuestión; carga probatoria que, en principio, sólo podría cumplirse a través de un peritaje contable (“*Bertoto, Bruera y Cía S.A.C. y F. c/Estado Nacional-AFIP-DGI s/demanda de repetición*”, del 19/5/10, cfr. CSJN [Fallos 333:631](#)). Y, en cuanto al contenido concreto de dicho medio probatorio, señaló que “*el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ya que tal compulsa no trasciende el ámbito infra constitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula*



constitucional invocada” (cfr. “Candy”, Considerando 4º y “Dugan Trocello”, Considerando único, segundo párrafo).

Para finalizar, se indicó que, sin perjuicio de lo descripto, si entre la ganancia neta sujeta al impuesto a las ganancias, calculada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de la aplicación del mecanismo de actualización “se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar” (“Candy”, Considerando 14º), deberá aplicarse el mecanismo de ajuste.

También indicó esta Sala –in re “[IBM Argentina SA c/EN-AFIP DGI-Resol 4/10 \(REGN\) s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 2901/2010, del 26/12/18 y “[Akapol SACIFI c/EN-AFIP-DGI-Resol 41/07-periodos 2002/2003 s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 10144/2009, del 17/3/22, entre otras–, que nuestra Corte Suprema, luego de dictados los precedentes “Dugan Trocello” y “Candy”, negó que pudiera considerarse vulnerada la garantía constitucional de no confiscatoriedad, si los resultados del ejercicio arrojaban quebranto.

Efectivamente, en el precedente “*Estancias Argentinas El Hornero SA c/ EN-AFIP-DGI c/ proceso de conocimiento*”, del 2/10/12 (CSJN, [Fallos: 335:1923](#)), haciendo suyos los fundamentos del dictamen de la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema, luego de efectuar una reseña de los distintos tratamientos que tuvo el instituto del quebranto en la historia de la imposición sobre la renta, afirmó que: “*Tal solución pretoriana del Tribunal [en referencia a la jurisprudencia que admite la posibilidad de que un tributo resulte inconstitucional por confiscatorio] tuvo por miras conjurar aquellas situaciones en las que el pago de uno o más gravámenes implicaban una lesión a la garantía de la propiedad individual, al reducir más allá de lo constitucionalmente tolerable sea la renta o el capital de los contribuyentes*”.

“*Es de toda evidencia que el caso de autos no puede ser encuadrado dentro de los lineamientos de esa doctrina, por la sencilla razón de que no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados para verificar si hay una absorción inadmisible de éstos*”.

Por tal motivo, y al no haber esa parte alegado ni mucho menos demostrado qué otra eventual causa de agravio constitucional padece a causa de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE
CONOCIMIENTO

la suspensión del mecanismo de ajuste inflacionario en trato, estimo que con lo dicho basta para desestimar su demanda” (los subrayados no me pertenecen) (cfr. CSJN, Fallos: 335:1923).

Dicha hermenéutica fue reiterada en los precedentes “[Alubia SA c/ AFIP-DGI s/ repetición](#)”, del 4/11/14; “[Natufarma SA c/ AFIP-DGI s/ demanda contenciosa](#)”, del 24/2/15 –en las cuales sostuvo que “...la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en los términos del precedente ‘Candy’ tiene por objeto evitar que se configure el supuesto de confiscatoriedad que -según los lineamientos de una tradicional jurisprudencia de la Corte- se produce cuando el pago de un impuesto implica la absorción, por parte del Estado, ‘de una porción sustancial de la renta o el capital’ ... sin que corresponda derivar de tal doctrina el reconocimiento de un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en otros ejercicios fiscales...”–; “[Consolidar Administradora de Riesgo de Trabajo ART SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol. LGCN 140/08 s/ DGI](#)”, del 11/8/15; “[Fava Hnos SA c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad](#)”, del 4/8/16; “[Favacard SA c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad](#)”, del 15/11/16; “[Bayer S.A. y otro cl AFIP s/ impugnación de acto administrativo](#)”, del 14/8/18 y en “[Giorno SA c/ AFIP – DGI s/ varios](#)”, del 24/11/21 ([Fallos: 344:1458](#)).

A lo apuntado cabe adicionar que el criterio descripto fue mantenido por el Alto Tribunal en: “[Recurso de hecho deducido por la AFIP en la causa Maipú Automotores SA c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad](#)” y “[Fava SA c/ AFIP DGI s/ acción declarativa ordinaria](#)”, ambas del 19/10/23; “[Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Humberto Batistella SA c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad](#)”, del 24/10/23; “[Recurso de hecho deducido por la AFIP-DGI en la causa Humberto Batistella SA c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad](#)”, del 20/2/24 y más cercano: “*Syngenta Agro S.A. c/ EN-AFIP-DGI-resol. 6/10 (REGN) períodos fiscales 2002/3/4 y otros s/ Dirección General Impositiva*”, del 27/12/24, ver voto de la mayoría ([Fallos: 347:2334](#)).

Finalmente, es del caso mencionar que esta Cámara también admitió la reexpresión de las amortizaciones de los bienes de uso; la actualización de costos por enajenación de bienes muebles, inmuebles e intangibles y de los



quebrantos impositivos (v. Sala I “[Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 5894/2014, del 9/5/19; Sala II “[Orazul Energy Cerros Colorados S.A.c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 78131/2017, del 29/6/21; Sala III “[Orazul Energy Cerros Colorados SA c/ EN-AFIP-RESOL s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 90935/2017, del 21/4/22; “[Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 70967/2017, del 29/12/23 y “[Telefónica Móviles Argentina SA c/ EN-AFIP-Resol s/ proceso de conocimiento](#)”, Causa CAF 5058/2021, del 24/2/26; Sala IV “[Weatherford International de Argentina SA c/ AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa N° 32870/2016, del 12/8/21 y Sala V “[Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 49252/2011, del 28/12/17), criterio que, por lo demás, fue también admitido por el Máximo Tribunal en las [Causas 49252/2011](#) y [5894/2014](#), ambas caratuladas “[Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva](#)”, con sentencias del 25/10/22).

XI. Que, en orden a lo reseñado anteriormente, se desprenden dos resultados: *el primero*, que la Corte Suprema de Justicia, para arribar a las conclusiones descriptas, hizo mérito especialmente de circunstancias fácticas y probatorias en torno de la comprobación de la alegada confiscatoriedad en cada período cuestionado; *el segundo*, que a pesar de que las decisiones del Máximo Tribunal sólo resultan vinculantes para las partes y para los órganos jurisdiccionales intervinientes en las causas en que son dictadas (cfr. CSJN, Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; [316:180](#), entre otros), no puede soslayarse que los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina (cfr. CSJN, Fallos: [311:2004](#), entre otros), habida cuenta de que ese Tribunal resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo cual torna aconsejable seguir sus lineamientos para mantener la unidad de la interpretación de la ley (v. esta Sala *in re* “[Cavaco, Adrián Alberto c/ UBA \(Facultad Ciencias Exactas\) s/ empleo público](#)”, Causa CAF 24801/2009, del 20/5/14 y “[Duke Energy Cerros Colorados SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva](#)”, Causa CAF 10307/2017, del 25/8/23, entre otros).

XII. Que, ahora bien, a lo explicado corresponde añadir las modificaciones legislativas operadas en los años 2017, 2018 y 2019.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

A través de la ley 27.430 –sancionada el 27/12/17– se incorporó al entonces artículo 95 de la ley del gravamen –texto ordenado en 1997, actual art. 106– la siguiente regla: *“El procedimiento dispuesto en el presente artículo [en referencia al “ajuste por inflación”] resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%)”*.

“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior”.

Posteriormente, a través de la ley 27.468 –sancionada el 4/12/18–, se lo sustituyó por el siguiente: *“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”*.

Por otro lado, la misma ley sustituyó las expresiones *“índice de precios internos al por mayor (IPIM)”* e *“índice de precios al por mayor, nivel general”* por *“índice de precios al consumidor nivel general (IPC)”*.

Por último, la ley 27.541 –sancionada el 21/12/19 y publicada en el Boletín Oficial del 23/12/19– sustituyó el artículo 194 de la ley del impuesto –texto ordenado en 2019–, estableciendo que: *“El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los*



dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes...”. De acuerdo con el artículo 87 de la ley, comenzaría a regir a partir del día de su publicación oficial.

XIII. Que, en función de lo explicado, y de cara a las posiciones asumidas por las partes contendientes, considero que las pautas y guías instituidas por el Alto Tribunal a partir del dictado del precedente “*Candy*”, deben ser aprehendidas e incorporadas en el presente estudio, sin por ello desatender las particularidades que actualmente evidencia el instituto tributario en trato.

De dicho precedente –tantas veces citado– se desprenden, entre otras, dos circunstancias de insoslayable mención:

i. Por un lado, la Corte Suprema, reseñando parte de la jurisprudencia relativa a las potestades con que cuenta el Poder Judicial, sostuvo que no es función de los jueces expedirse acerca del mérito de las políticas económicas decididas por los otros poderes, sino ponerles un límite cuando se traduzcan en una violación de la Constitución Nacional.

Bajo tal premisa –sumado al resto de los fundamentos reseñados en el *Considerando X* de este voto– revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.073, artículo 4° de la ley 25.561 y decreto 214/02, en línea con lo que anteriormente había resuelto en la causa “*Dugan Trocello*”.

Adentrándome en el planteo de autos, colijo que, en línea con lo reseñado, las decisiones adoptadas por el legislador en punto al modo de medir las variables macroeconómicas y sus implicancias en la cuantificación de la base imponible del impuesto, son asuntos que, *per se*, no merecen reproche constitucional.

Esto quiere decir, pues, que las disposiciones adoptadas por el Poder Legislativo mediante las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, a la luz del planteo de autos, son plenamente aplicables al presente caso.

Vale evocar el principio según el cual “... *las leyes se presumen constitucionales, por aplicación del principio más general de validez presunta de los actos del poder público (Fallos: 190:142)*” (cfr. CSJN, Fallos: 239:157).

ii. Por el otro lado, a partir del Considerando 7° de “*Candy*”, el Tribunal se abocó al estudio de la cuestión restante, concerniente a la confiscatoriedad que había sido invocada por la firma contribuyente. Al respecto,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

sostuvo que si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste, y el importe que resulta de aplicarlo, no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, *“ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”* (v. Considerando 14). Esto condujo a que, en el caso particular, se hiciera lugar a la demanda y se declarara aplicable el mecanismo de ajuste por inflación.

Pues bien, a la luz de lo que vengo exponiendo a lo largo de este considerando, tengo para mí que, sin perjuicio de la reimplantación del mecanismo de ajuste por inflación en nuestro ordenamiento legal, el test de constitucionalidad direccionado a corroborar si la carga impositiva es confiscatoria se halla justificado, dado que responde a los principios, derechos y garantías supraleales que conforman y estructuran nuestro régimen republicano y democrático de derecho, reconocedor, entre otros, del derecho de propiedad de los habitantes (Constitución Nacional, arts. 14, 17).

XIV. Que lo explicado *supra* demarca los pasos a seguir en este examen, pudiéndose resumir de la siguiente manera: las modificaciones que introdujeron las leyes 27.430, 27.468 y 27.541 a la ley 20.628 (t.o.) son plenamente aplicables al caso; no obstante, y sin desmedro de ello, corresponde atender y evaluar el argumento introducido y mantenido por la accionante, en el sentido de que la liquidación del tributo, bajo las condiciones legalmente impuestas, absorbió una parte sustancial de su renta, excediendo el límite razonable de imposición (v. esta Sala, en su anterior integración, *in re* “[Banco BMA SAU \(ex Banco Itaú Argentina SA\) \(TF 104149914-I\) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo](#)”, Causa CAF 35582/2023/CA1, del 5/11/24).

Esta premisa abre el camino al estudio de la materia descripta en el *punto b)* del segundo párrafo del *Considerando IX* de este voto.



XV. Que, accediendo a la compulsa de las piezas de autos, observo que, además de la *prueba instrumental* acompañada por la demandante –v. *Considerando VII*–, ofreció *prueba pericial contable*, a cuyo tenor el perito contador de oficio designado en autos acompañó su dictamen el 15/3/22 [11:19 hs], el cual fue impugnado por la representación fiscal el 4/4/22 [12:32 hs] y contestado por el experto el 19/5/22 [9:05 hs]; este último fue también impugnado por el fisco nacional el 10/6/22 [22:49 hs].

XVI. Que ahora bien, examinando detenidamente el escenario de autos, colijo que presenta una serie de componentes que no pueden pasarse por alto.

Por un lado, el ejercicio comercial de Arquimia SA que aquí interesa, tuvo inicio el 1/11/18 y cierre el 31/10/19. Ello condujo al fisco nacional a sostener que resultaban aplicables las leyes 27.430 y 27.468, particularmente en cuanto estatuyeron que, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/18, correspondía verificar que el índice de precios al consumidor superara el 55%; luego de ello –siguiendo la lectura–, de ser el caso, podría aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación, en un 1/3.

Al respecto, advierto que en el escrito de demanda ninguna referencia se ha hecho sobre estos extremos, más allá del *racconto* histórico del mecanismo de ajuste en cuestión. Es decir, la actora no ha explicado, con el grado de precisión que esta materia exige, cuál era su situación jurídico-fiscal, con respecto al período fiscal 2019, a la luz del ordenamiento legal vigente (v. Sala V, *in re* “[*Cityssan SA c/ AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*](#)”, Causa CAF 12912/2020, del 17/7/25). Es que, como lo he explicado anteriormente, el contexto normativo, respecto al instituto tributario en trato, no ha sido el mismo antes del 1/1/18, durante el año 2018, ni tampoco luego del 1/1/19.

En este devenir, es sumamente importante exponer clara, precisa y detalladamente la realidad en la cual se halla la empresa, pues de ello dependerán las probanzas a producir, y finalmente el decisorio a dictar. Al respecto, es oportuno rememorar que la finalidad del proceso consiste en comprender, según la ley, los elementos que constituyen la situación jurídica a juzgar, lo cual requiere, como condición indispensable de la actuación de su voluntad, la formulación precisa y acabada de la realidad a la cual se ha de aplicar, ya que, cuando los hechos no son desarrollados con claridad ni relacionados adecuadamente con el caso, la controversia resulta no estar lo suficientemente





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

madura como para sustentar una posición determinada del actor frente a la órbita fáctica sobre la cual, necesariamente, se ha de circunscribir la actividad jurisdiccional (cfr. CSJN, “*Knowles and Foster Liquidador de, contra Santiago del Estero, Provincia, sobre Cómputo de intereses*”, del 28/10/75, Considerando 9° ([Fallos: 293:281](#)); v. asimismo, esta Sala, en su anterior integración, *in re* “[Cooperativa Agrícola Ganadera de Peyrano \(TF 31857-I\) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo](#)”, Causa CAF 11987/2024, del 16/9/25).

Precisamente, por esto ultimo también reparo que las pruebas producidas en la causa –en especial, la pericia contable–, no echan luz sobre la cuestión a dirimir.

Nótese que, en el punto de pericia 3°, el auxiliar calculó el “ajuste por inflación impositivo” –valudado en \$ 76.068.549,15–, pero sin especificar si es el total, 1/3 o, eventualmente, 1/6. Además, tal como lo apunta la demandada en su primera impugnación, el perito no explica cómo alcanzó ese valor, ni exhibió los importes del ajuste estático y del dinámico.

En otro orden, y por derivación de lo anterior, el experto no calculó ni comparó con exactitud el resultado impositivo sin aplicar el ajuste por inflación, aplicándolo en 1/3 o, en su caso, en 1/6.

En este sendero, adquiere especial sentido lo que dijera en el *punto b)* del último párrafo del *Considerando IX*, en cuanto a la importancia y necesidad de evaluar la aptitud y la suficiencia de las argumentaciones y probanzas arrimadas y producidas en la causa, a fin de respaldar la pretensión de la accionante.

Así pues, la inexistencia o deficiencia de estos recaudos, impiden al juzgador conocer la realidad económica de la empresa, y por ello comprobar si, en el caso, existiría un exceso irrazonable de imposición a la renta, a causa de no activarse –o de hacerlo en 1/3 o en 1/6– el mecanismo de ajuste por inflación.

Tiene dicho el Alto Tribunal que, la acreditación de la confiscatoriedad requiere un serio, completo y preciso despliegue probatorio, lo cual se logra, en principio, a través de un peritaje contable (cfr. CSJN, “*Bertoto, Bruera y Cía*, cit.).



XVII. Que, a la luz de lo expuesto, concluyo que la pretensión de la actora no alcanza el umbral exigido para su admisión en esta causa, lo cual se traduce en su rechazo.

Por esta razón, **corresponde hacer lugar al recurso deducido por la representación fiscal y revocar la sentencia apelada** en lo que hace al fondo del asunto, y por ello, **rechazar la demanda**.

Que, por último, en cuanto a las **costas** del proceso –lo cual incluye la de ambas instancias–, corresponde confirmar la sentencia apelada, en atención a la complejidad y novedad que reviste la cuestión examinada en la causa (cfr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 68 segundo párrafo) (v. esta Sala, en su anterior composición, *in re* “*Akapol SACIFI c/EN-AFIP-DGI-Resol 41/07-periodos 2002/2003*”, cit.; “*Orazul Energy Cerros Colorados SA*”, Causa CAF 90935/2017, cit; “*Carsa SA (TF 34186-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa CAF 60220/2022, del 23/3/23; “*Poliresias San Luis SA (TF 48784-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa CAF 19467/2022, del 15/6/23; “*M Royo SACIIFYF*”, cit; “*Duke Energy Cerros Colorados SA*”, cit; “*Seguros Sura SA c/ EN-AFIP-DGI y otro c/ Dirección General Impositiva*”, cit; “*Banco BMA SAU (ex Banco Itaú Argentina SA) (TF 104149914-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo*”, cit.; “*Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, cit. y “*Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ Dirección General Impositiva*”, cit. En igual sentido: Sala I, “*BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, cit.; “*Telefónica Móviles Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 8934/2020, del 26/3/24; “*RCI Banque c/ EN-AFIP-DGI-expte 2073941/22 s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 21392/2023, del 21/10/25; Sala II, “*Monsanto Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 33047/2017, del 23/2/24; “*Metlife Seguros de Retiro SA c/ EN-AFIP s/ proceso de conocimiento*”, cit.; “*Pampa Generación SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, cit. y “*Diransa SRL c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, cit.; asimismo, Sala V, “*Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, cit. e “*Ita SA Industria y Tecnológica SA (TF 111430918-I)*”, cit.).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 13829/2020/CA1; ARQUIMIA SA c/ EN-AFIP s/ PROCESO DE
CONOCIMIENTO

XVIII. Que, por todo lo expuesto, si mi voto es compartido, corresponderá revocar la sentencia apelada y distribuir las costas en el orden causado.

El Dr. José Luis Lopez Castiñeira adhiere al voto del vocal preopinante.

Por todo lo expuesto, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, **SE RESUELVE:** 1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el fisco nacional y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada. 2º) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora. 3º) Distribuir las costas en el orden causado.

Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/26 de esta Cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

